

VERSIÓN PÚBLICA DEL ACUERDO P/IFT/251115/534

DE LA SESIÓN DEL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES EN SU XXVII SESIÓN ORDINARIA DEL 2015, CELEBRADA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2015.

LEYENDA DE LA CLASIFICACIÓN

Fecha de Clasificación: 11 de diciembre de 2015. **Unidad Administrativa:** Secretaría Técnica del Pleno. **Confidencial:** Si, por contener información Confidencial; por lo anterior, el 14 de enero de 2016 se elaboró versión pública del Acuerdo P/IFT/251115/534, de conformidad con los artículos 106, 107 y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública ("LGTAIP").

Núm. de Resolución	Descripción del asunto	Fundamento legal	Motivación	Secciones Confidenciales
P/IFT/251115/534	Resolución mediante la cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones declara la pérdida de bienes en beneficio de la Nación, derivado del procedimiento administrativo iniciado en contra de la empresa Máxima Comunicación Gráfica, S.C., por invadir el espectro radioeléctrico en la frecuencia 824,534 MHz, en el Distrito Federal.	Confidencial con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Contiene datos personales de una persona identificada o identificable.	Páginas 10-14 y 22.

Firma y Cargo del Servidor Público que clasifica: Lic. Yaratzet Funes López, Prosecretaría Técnica del Pleno-----

-----Fin de la leyenda.



Versión pública, de conformidad con el artículo 23 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince y el artículo 47, primer párrafo, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicada el catorce de julio de dos mil catorce.



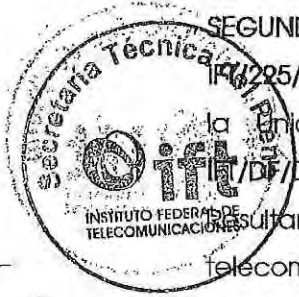
MÁXIMA COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.C.
Avenida Paseo de la Reforma, Número
250, Torre B, Piso 19, Colonia Juárez,
Delegación Cuauhtémoc, Código Postal
06600, México, Distrito Federal.



México, Distrito Federal, a veinticinco de noviembre de dos mil quince.- Visto para resolver el expediente E-IFT.UC.DG-SAN.II.0217/2015, formado con motivo del procedimiento administrativo para declarar la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, iniciado mediante acuerdo de catorce de septiembre de dos mil quince y notificado el dieciocho de septiembre del mismo año por conducto de la Unidad de Cumplimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones (el "IFT" o "Instituto"), en contra de **MÁXIMA COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.C., (MÁXIMA COMUNICACIÓN)** por la probable actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (la "LFTyR"). Al respecto, se emite la presente Resolución de conformidad con lo siguiente, y

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Por oficio IFT/225/UC/DGA-VERSE/137/2015, de veintiséis de febrero de dos mil quince la Dirección General Adjunta de Vigilancia del Espectro Radioeléctrico ("DGAVER") informó a la Dirección General de Verificación ("DGV") que con motivo del escrito presentado el 9 de enero de 2015 por los representantes de SOS Telecomunicaciones, S.A. de C.V. por el cual se hizo del conocimiento la presunta interferencia de la banda de 825 a 835/870 a 880 MHz (banda celular) que esa empresa tiene concesionada para prestar el servicio de telefonía móvil; así como del resultado de los trabajos de radiomonitorio llevados a cabo por la DGAVER en el área reportada, se detectó una señal que utiliza el rango de frecuencias 824 a 835 MHz, específicamente en la frecuencia 824.658875 MHz proveniente del domicilio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma Número 250, Colonia Juárez, Delegación/Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, Distrito Federal.



SEGUNDO. Con la finalidad de corroborar lo anterior, mediante oficio IFT/225/UC/DG-VER/1236/2015 de veintuno de abril de dos mil quince, la DGV de la Unidad de Cumplimiento ordenó la visita de inspección-verificación IFT/DF/DGV/268/2015 en el inmueble ubicado en la dirección señalada en el Resultando que antecede, así como a las instalaciones y equipos de telecomunicaciones localizados en el mismo. Lo anterior, con el objeto de "... constatar y verificar si LA VISITADA tiene instalados y/o en operación, equipos de telecomunicaciones con los que use, aproveche o explote el espectro radioeléctrico dentro del intervalo de frecuencia 820 a 840 MHz, y en su caso, verificar que cuenta con concesión, permiso o autorización respectiva vigente emitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones y que las emisiones radioeléctricas que se generen, no causen interferencias perjudiciales a los concesionarios autorizados que operen en el intervalo de frecuencia antes descrito...".

TERCERO. En cumplimiento al oficio precisado en el Resultando anterior, el veintidós de abril de dos mil quince, los inspectores-verificadores de telecomunicaciones y radiodifusión adscritos a la DGV (LOS VERIFICADORES), se constituyeron en el domicilio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma Número 250, Torre B, Piso 19, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, Distrito Federal.

Conforme a las actuaciones llevadas a cabo, se levantó el acta de verificación ordinaria IFT/DF/DGV/268/2015 (ACTA DE VERIFICACIÓN), en la cual hace constar la existencia de emisiones radioeléctricas detectadas en la frecuencia **824.534 MHz** en el domicilio visitado, en el que se encontraban dos equipos amplificadores de señal de telefonía celular, mismos que eran usados por **MÁXIMA COMUNICACIÓN**.

CUARTO. Mediante oficio IFT/225/UC/DG-VER/2519/2015 de fecha veintiséis de junio de dos mil quince notificado el día tres de julio siguiente, la DGV informó a

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

MÁXIMA COMUNICACIÓN, que el procedimiento de Inspección y verificación había concluido y que derivado del análisis y dictamen efectuados respecto del ACTA DE VERIFICACIÓN y sus anexos, se determinó la probable actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 305 de la LFTyR.



QUINTO. Mediante oficio IFT/225/UC/DG-VER/2691/2015, de fecha veintitrés de junio de dos mil quince notificado el treinta y uno de julio de dos mil quince, la DGV emitió el "Dictamen mediante el cual se propone el inicio del PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE DECLARATORIA DE PÉRDIDA DE BIENES, INSTALACIONES Y EQUIPOS EN BENEFICIO DE LA NACIÓN, en contra de MÁXIMA COMUNICACIÓN GRÁFICA S.C., por la presunta actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, derivado de la visita de inspección y verificación que consta en el Acta de Verificación Ordinaria número IFT/DF/DGV/268/2015."

SEXTO. En virtud de lo anterior, por acuerdo de catorce de septiembre de dos mil quince, este Instituto por conducto del Titular de la Unidad de Cumplimiento inició el procedimiento administrativo de declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en contra de MÁXIMA COMUNICACIÓN, por presumirse la invasión de la vía general de comunicación consistente en bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, en específico la invasión de la frecuencia 824.534 MHz.

SÉPTIMO. El dieciocho de septiembre de dos mil quince, se notificó a MÁXIMA COMUNICACIÓN el contenido del acuerdo de inicio de catorce de septiembre del año en curso, concediéndole un plazo de quince días, para que en uso del beneficio de la garantía de audiencia consagrada en los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ("CPEUM") y 72 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo ("LFPA") expusiera lo que a su derecho conviniera y, en su caso, aportara las pruebas con que contara.



El término concedido a **MÁXIMA COMUNICACIÓN** para presentar sus manifestaciones y ofrecer pruebas, transcurrió del veintiuno de septiembre al nueve de octubre de dos mil quince.

OCTAVO. No obstante lo anterior, **MÁXIMA COMUNICACIÓN** no ejerció su derecho de defensa, por lo que mediante proveído de dieciséis de octubre del año en curso, notificado a través de las listas que se publican en la página de Internet de este Instituto del día diecinueve de octubre siguiente, se declaró precluido el derecho de **MÁXIMA COMUNICACIÓN** para manifestar lo que a su derecho conviniera y ofrecer pruebas.

Asimismo por corresponder al estado procesal que guardaba el presente asunto, con fundamento en el artículo 56 de la LFPA, se pusieron a su disposición los autos del presente expediente para que dentro del término de diez días formulara los alegatos que a su derecho conviniera, en el entendido de que transcurrido dicho plazo, con alegatos o sin ellos se emitiría la resolución que conforme a derecho correspondiera.

El término concedido a **MÁXIMA COMUNICACIÓN** para presentar sus alegatos transcurrió del veinte de octubre al dos de noviembre del presente año, en razón de que dicho acuerdo fue notificado a través de las listas que se publican en la página de internet de este Instituto el día diecinueve de octubre, sin contar los días veinticuatro, veinticinco y treinta y uno de octubre, así como el primero de noviembre de dos mil quince por ser sábados y domingos respectivamente, en términos del artículo 28 de la LFPA.

NOVENO. Habiendo transcurrido el término conferido para formular alegatos, sin que se haya presentado documento alguno por parte de **MÁXIMA COMUNICACIÓN**, se puso el expediente en estado de resolución y por lo tanto fue remitido a este órgano colegiado para la emisión de la Resolución que conforme a derecho resulte procedente.



CONSIDERANDO

PRIMERO. COMPETENCIA.

El Pleno del Instituto es competente para conocer y resolver el presente procedimiento administrativo de declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación, con fundamento en los artículos 14, 16 y 29, párrafos, décimo quinto, décimo sexto y vigésimo, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); 1, 2, 6, fracciones II, IV y VII, 7, 15 fracción XXX, 17, penúltimo y último párrafos, 297, primer párrafo y 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR); 523 y 524 de la Ley de Vías Generales de Comunicación ("LVGC"); 3, 8, 9, 12, 13, 14, 16, fracción X, 28, 49, 50, 59, 70, fracciones II y VI, 72, 73, 74 y 75 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo (LFPA); y 1, 4, fracción I y 6, fracción XVII, del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (ESTATUTO).



SEGUNDO. CONSIDERACIÓN PREVIA

La Soberanía del Estado sobre el uso aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico se ejerce observando lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la CPEUM, los cuales prevén que el dominio de la Nación sobre el espectro es inalienable e imprescriptible y que la explotación, uso o aprovechamiento de dicho recurso por los particulares o por sociedades debidamente constituidas, sólo puede realizarse mediante títulos de concesión otorgados por el IFT, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezca la normatividad aplicable en la materia.

En este sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 28, párrafos décimo quinto y décimo sexto, de la CPEUM, el IFT es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, para lo cual tiene a su cargo, entre otros, la regulación, promoción y supervisión del uso,

Handwritten mark or signature



aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones

Consecuente con lo anterior, el Instituto es el encargado de vigilar la debida observancia a lo dispuesto en las concesiones y autorizaciones, así como a la normatividad que resulte aplicable en relación con el uso, aprovechamiento y explotación de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico, a fin de asegurar que la prestación de los servicios de telecomunicaciones se realice de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.

Bajo esas consideraciones, el ejercicio de las facultades de supervisión y verificación por parte del IFT traen aparejada la relativa a imponer sanciones por el incumplimiento a lo establecido en las leyes correspondientes o en los respectivos títulos de concesión, asignaciones o permisos; con la finalidad de inhibir aquellas conductas que atenten contra los objetivos de la normatividad en la materia.

En ese sentido, la Unidad de Cumplimiento en ejercicio de sus facultades, llevó a cabo la sustanciación de un procedimiento administrativo para declarar la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación en contra de MÁXIMA COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.C. y propuso a este Pleno emitir la declaratoria respectiva al considerar que con su conducta, dicha persona moral actualizó la hipótesis normativa prevista en el artículo 305 de la LFTyR.

Ahora bien, para determinar la procedencia en la imposición de una sanción, la LFTyR aplicable en el caso en concreto, no sólo establece obligaciones para los concesionarios y permisionarios, así como para los gobernados en general, sino también señala supuestos de incumplimiento específicos y las consecuencias jurídicas a las que se harán acreedores en casos de infringir la normatividad en la materia.

Es decir, al pretender imponer una sanción, esta autoridad debe analizar minuciosamente la conducta que se le imputa al presunto infractor y determinar si la misma es susceptible de ser sancionada en términos del precepto legal o normativo que se considera violado.



En este orden de ideas, la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el desarrollo jurisprudencial de los principios del derecho penal en el campo administrativo sancionador irá formando los principios propios para este campo del *ius puniendi* del Estado, sin embargo, en tanto esto sucede, es válido considerar de manera prudente las técnicas garantistas del derecho penal, como lo es el principio de inaplicabilidad de la analogía en materia penal o tipicidad.

En ese sentido, el derecho administrativo sancionador y el derecho penal al ser manifestaciones de la potestad punitiva del Estado y dada la unidad de éstos, en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo sancionador debe cuidarse al aducido principio de tipicidad, normalmente referido a la materia penal, haciéndolo extensivo a las infracciones y sanciones administrativas, de modo tal que si cierta disposición administrativa establece una sanción por alguna infracción, la conducta realizada por el afectado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida, sin que sea lícito ampliar ésta por analogía o por mayoría de razón.

Así, en la especie, se considera que la conducta desplegada por el presunto infractor actualiza la segunda hipótesis normativa contenida en el artículo 305 de la LFTVR, que al efecto establece que la persona que por cualquier medio invade u obstruya las vías generales de comunicación, perderá en beneficio de la nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de la infracción.

Desde luego, el mencionado precepto dispone lo siguiente:

13



"Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones."

De lo anterior podemos concluir que el principio de tipicidad sólo se cumple cuando en una norma consta una predeterminación tanto de la infracción como de la sanción, es decir que la propia ley describa un supuesto de hecho determinado que permita predecir las conductas infractoras y las sanciones correspondientes para tal actualización de hechos, situación que se hace patente en el presente asunto, al establecer el citado precepto legal tanto la conducta sancionable que en el presente caso la constituye la invasión de una vía general de comunicación, como la sanción por cometer dicha conducta, que es la pérdida de los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de la infracción.

Por otra parte, resulta importante mencionar que para el ejercicio de la facultad sancionadora en el caso de incumplimiento de las disposiciones legales en materia de telecomunicaciones, el artículo 297 de la LFTyR establece que para la imposición de las sanciones previstas en dicho cuerpo normativo, se estará a lo previsto por la LFPA, la cual prevé dentro de su Título Cuarto, el procedimiento para la imposición de sanciones administrativas.

En efecto, los artículos 70 y 72 de dicho ordenamiento, establecen que para la imposición de una sanción, se deben cubrir dos premisas: I) que la sanción se encuentre prevista en la ley y II) que previo a la imposición de la misma, la autoridad competente notifique al presunto infractor el inicio del procedimiento respectivo, otorgando al efecto un plazo de quince días para que el presunto infractor exponga lo que a su derecho convenga, y en su caso aporte las pruebas con que cuente.

Así las cosas, al iniciarse el procedimiento administrativo de imposición de sanción en contra de MÁXIMA COMUNICACIÓN, se presumió la actualización de la

hipótesis normativa prevista en el artículo 305 de la LFTyR, ya que se encontraba invadiendo una vía general de comunicación, que en la especie lo constituye el espectro radioeléctrico en la frecuencia 824.534 MHz.

En este sentido, a través del acuerdo de Inicio de procedimiento, la Unidad de Cumplimiento dio a conocer a **MÁXIMA COMUNICACIÓN** la conducta que presuntamente viola disposiciones legales, así como la sanción prevista en ley por la comisión de la misma. Por ello, se le otorgó un término de quince días hábiles para que en uso de su garantía de audiencia rindiera las pruebas y manifestara por escrito lo que a su derecho conviniera. Lo anterior de conformidad con el artículo 14 de la CPEUM, en relación con el artículo 72 de la LPPA.

Concluido el periodo de pruebas, de acuerdo con lo que dispone el artículo 56 de la LPPA, la Unidad de Cumplimiento puso las actuaciones a disposición del interesado, para que éste formulara sus alegatos.

Una vez desahogado el periodo probatorio y vencido el plazo para formular alegatos, la Unidad de Cumplimiento remitió el expediente de mérito en estado de Resolución al Pleno de este Instituto, el cual se encuentra facultado para dictar la Resolución que en derecho corresponda.

Bajo ese contexto, el procedimiento administrativo de imposición de sanciones que se sustancia se realizó conforme a los términos y principios procesales que establece la LPPA consistentes en: i) otorgar garantía de audiencia al presunto infractor; ii) desahogar pruebas; iii) recibir alegatos, y iv) emitir la Resolución que en derecho corresponda. Lo anterior, no obstante que en el presente asunto **MÁXIMA COMUNICACIÓN** no compareció a ejercer su derecho de defensa.

En las relatadas condiciones, al tramitarse el procedimiento administrativo de declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación bajo las anteriores premisas, debe tenerse por satisfecho el cumplimiento

¹ Dichos principios tienen su fundamento en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales establecen la garantía de debido proceso.



de lo dispuesto en la CPEUM, las leyes ordinarias y los criterios judiciales que señalan cuál debe ser el actuar de la autoridad para resolver el presente caso.

TERCERO. HECHOS MOTIVO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA DECLARAR LA PÉRDIDA DE BIENES, INSTALACIONES Y EQUIPOS EN BENEFICIO DE LA MÁXIMA COMUNICACIÓN.

El veintidós de abril de dos mil quince, LOS VERIFICADORES levantaron el ACTA DE VERIFICACIÓN con motivo de la orden de inspección-verificación ordinaria IFT/DF/DGV/268/2015 contenida en el oficio IFT/225/UC/DG-VER/1236/2015 de veintiuno de abril de dos mil quince, practicada a MÁXIMA COMUNICACIÓN.

Para lo anterior, LOS VERIFICADORES se constituyeron en el domicilio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma, Número 250, Torre B, Piso 19, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, Distrito Federal, lugar en el cual previamente personal de la DGAVER había detectado las emisiones radioeléctricas que operaban en la frecuencia 824.534 MHz.

En dicho lugar solicitaron a la persona que atendió la visita, [REDACTED] quien dijo tener el carácter de Asistente de Dirección Comercial de MÁXIMA COMUNICACIÓN, que proporcionara el acceso al inmueble, a las instalaciones y al equipo de telecomunicaciones localizados en el mismo, para realizar la inspección respectiva. De esta forma, advirtieron que se trata de un edificio de veintisiete pisos, con fachada de cristales y aluminio, por lo que una vez que se constituyeron en el interior del mismo en el piso diecinueve, observaron una oficina de aproximadamente treinta y cinco metros de largo por veinte metros de ancho, la cual se encuentra dividida en varias secciones con cancelas de aluminio y cristal.

Asimismo, LOS VERIFICADORES solicitaron a [REDACTED] indicara si en el inmueble donde se actuaba, se tenían instalados y en operación, equipos de telecomunicaciones con los que se usara, aprovechara o explotara el espectro radioeléctrico dentro del intervalo de frecuencia de 820 a 840 MHz.



Dado el desconocimiento de tal circunstancia por [REDACTED] [REDACTED] LOS VERIFICADORES solicitaron su autorización para que el personal adscrito a la DGAVER ingresara al inmueble en el que se actuaba para realizar las mediciones técnicas a fin de apoyar a LOS VERIFICADORES a dar cumplimiento al objeto de la visita.

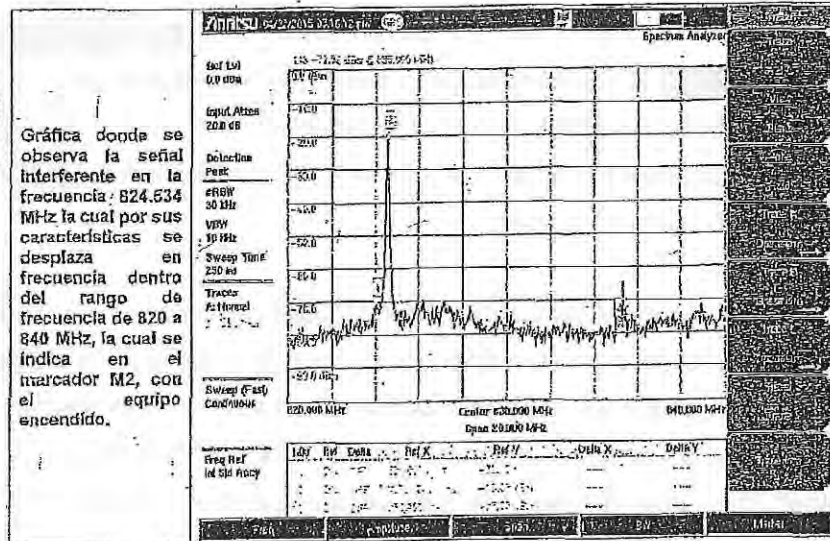
Con la autorización respectiva, LOS VERIFICADORES realizaron un recorrido por el Interior del Inmueble y, como resultado de dicha inspección (según se desprende del reporte fotográfico de las instalaciones ubicadas en el inmueble visitado) encontraron dos equipos amplificadores de señal de telefonía celular modelo ST-1085B AGC sin marca ni número de serie visible, colocados aproximadamente a tres metros del piso, sobre una trabe metálica parte de la estructura del inmueble, apreciando cuatro líneas de transmisión que conectan los equipos con las antenas, las cuales no eran visibles. Cabe señalar que dichos equipos se encontraban conectados a la corriente eléctrica, encendidos y en operación.

Hecho lo anterior, el personal técnico adscrito a la DGAVER realizó una medición para determinar si existían emisiones radioeléctricas dentro del rango de frecuencias de 820 MHz a 840 MHz producidas por el equipo amplificador de señal de telefonía celular, modelo ST-1085B AGC sin marca antes descrito.

Como resultado de dicha medición, se detectó con el apoyo de un equipo portátil marca Anritzu, modelo MS2713E, con rango de operación desde 0 GHz hasta 6 GHz y antena direccional marca Rohde & Schwarz, modelo HE300 (005 a 7.5 GHz) que de los equipos amplificadores de señal de telefonía celular modelo ST-1085B AGC sin marca, ni número de serie visibles, se generaron emisiones radioeléctricas en la frecuencia 824.534 MHz, obteniéndose la siguiente gráfica:



Handwritten mark or signature



Asimismo, LOS VERIFICADORES, formularon a [REDACTED] RIVERO entre otras, las siguientes preguntas:

1. "¿Quién es el ocupante o arrendatario del local, donde se lleva a cabo la presente diligencia y desde cuando lo ocupa?" a lo que ella respondió "Máxima Comunicación Gráfica, S.C. y se ocupa el Inmueble desde hace aproximadamente un año."

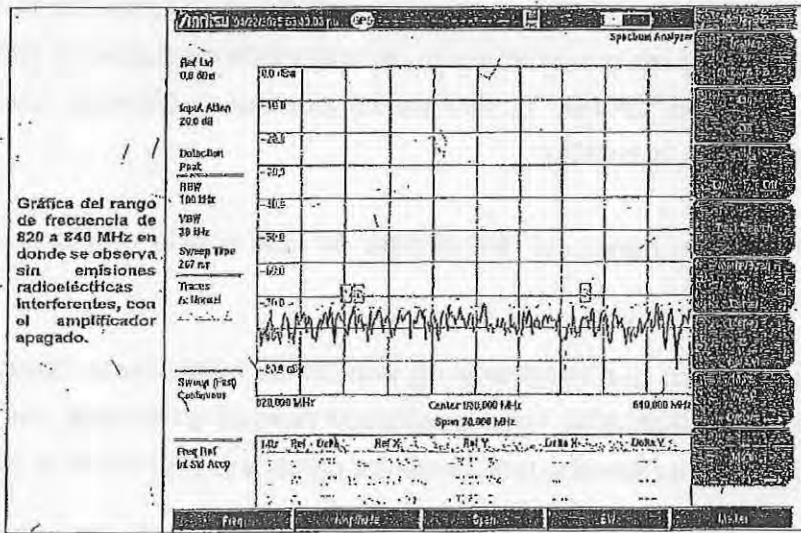
2. "¿Qué persona física o moral es el propietario, poseedor, responsable, o encargado de los equipos encontrados durante la presente diligencia y descritos en la presente acta?" a lo que respondió "Máxima de Comunicación Gráfica, S.C."

3. "¿Qué uso tiene los equipos amplificadores de señal de telefonía celular detectados y descritos en la presente acta?, a lo que respondió, mejorar la señal de telefonía celular, ya que la cobertura es casi nula.

Posteriormente, LOS VERIFICADORES solicitaron a [REDACTED] [REDACTED] indicara si cuenta con concesión, permiso, autorización o asignación que ampare el uso, aprovechamiento o explotación en la frecuencia

de 824.534 MHz, a la que manifestó: "Desconocíamos que fuera necesario contar con un permiso para utilizar los equipos".

A solicitud de LOS VERIFICADORES, [REDACTED] apagó y desconectó el equipo de telecomunicaciones antes descrito con el cual se invadía el espectro radioeléctrico en la frecuencia 824.534 MHz, y después de haberse realizado una nueva medición y detección de frecuencias del espectro radioeléctrico por personal de la DGAVER, se determinó que habían cesado las emisiones radioeléctricas interferentes dentro del intervalo de frecuencias de 820 MHz a 840 MHz, obteniéndose la gráfica siguiente:



Por lo anterior, se procedió al aseguramiento del equipo encontrado en el inmueble en donde se practicó la visita, quedando como interventor especial (depositario) del mismo [REDACTED] quien aceptó y protestó el cargo, situación que se hizo constar en el ACTA DE VERIFICACIÓN, conforme a lo siguiente:



Equipo	Marca	Modelo	Número de Serie	Sello de aseguramiento
Amplificador de señal de telefonía celular	Sin marca	ST-1085B AGC	No visible	092-15
Amplificador de señal de telefonía celular	Sin marca	ST-1085B AGC	No visible	093-15
Línea de transmisión	—	—	—	094-15
Línea de transmisión	—	—	—	095-15

Dado lo anterior, **LOS VERIFICADORES** informaron a [REDACTED] que en términos del artículo 524 de la LVGC se le otorgaba un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la conclusión de la diligencia, para que en ejercicio de su garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la CPEUM, presentara las pruebas y defensas que estimara procedentes ante el Instituto.

El plazo otorgado transcurrió del veintitrés de abril al siete de mayo de dos mil quince.

De las constancias que integran el expediente de mérito, no se desprende que **MÁXIMA COMUNICACIÓN**, haya presentado pruebas y defensas; por lo que se tuvo por perdido su derecho para presentar pruebas y defensas de su parte.

Derivado de lo anterior y una vez analizadas las constancias respectivas, la Dirección General de Verificación estimó que con su conducta **MÁXIMA COMUNICACIÓN** presuntamente actualizó la hipótesis normativa prevista en el artículo 305, de la LFTyR. Lo anterior de conformidad con lo siguiente:

Artículo 305 de la LFTyR.

Dicha disposición establece que "Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con concesión o autorización,

o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones”.

En efecto, el espectro radioeléctrico constituye un bien de uso común que está sujeto al régimen de dominio público de la Federación, pudiendo hacer uso de él todos los habitantes de la República Mexicana, con las restricciones establecidas en las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas aplicables, pero para su aprovechamiento se requiere concesión otorgada conforme a las condiciones y requisitos legalmente establecidos, los que no crean derechos reales, pues sólo otorgan frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho al uso, aprovechamiento o explotación conforme a las leyes y al título correspondiente. Al respecto, durante la diligencia de Inspección-verificación, **LOS VERIFICADORES**, advirtieron que **MÁXIMA COMUNICACIÓN** estaba invadiendo la banda de frecuencia 824.534 MHz, por lo que el Titular de la Unidad de Cumplimiento inició el procedimiento administrativo para declarar de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación que se resuelve por este Órgano Colegiado.

Lo anterior considerando que de conformidad con los artículos 15, fracción XXX de la LFTyR y 41 en relación con el 44, fracción I, 6, fracción XVII, del ESTATUTO, el Titular de la Unidad de Cumplimiento tiene facultad para sustanciar procedimientos administrativos sancionatorios y el Pleno del Instituto se encuentra facultado para declarar la pérdida de los bienes instalaciones y equipos en beneficio a favor de la Nación, por el incumplimiento e infracción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

En tal sentido, atendiendo a la propuesta formulada por la DGV, mediante acuerdo de catorce de septiembre de dos mil quince, se dio inicio al procedimiento administrativo de imposición de sanción en contra de **MÁXIMA COMUNICACIÓN**, el cual fue notificado el diechocho de septiembre de dos mil





quince, y en el mismo se le otorgó un plazo de 15 días hábiles para que manifestara lo que a su derecho conviniera y ofreciera las pruebas que considerara procedentes.

CUARTO. MANIFESTACIONES Y PRUEBAS

Mediante acuerdo de catorce de septiembre de dos mil quince, el Titular de la Unidad de Cumplimiento inició el procedimiento administrativo para declarar de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación en el que se le otorgó a MÁXIMA COMUNICACIÓN un término de quince días hábiles para que manifestara lo que a su derecho conviniera y en su caso, aportara las pruebas con que contara con relación a los presuntos incumplimientos que se le imputaron.

Dicho acuerdo fue notificado el dieciocho de septiembre de dos mil quince, por lo que el plazo de quince días hábiles corrió del veintinueve de septiembre al nueve de octubre de dos mil quince.

De acuerdo a lo señalado en el Resultando OCTAVO de la presente Resolución, y toda vez que MÁXIMA COMUNICACIÓN no presentó pruebas y defensas, por proveído de dieciséis de octubre de dos mil quince, notificado por lista el día diecinueve de octubre del año en curso, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado a MÁXIMA COMUNICACIÓN en el acuerdo de catorce de septiembre de dos mil quince y se le tuvo por perdido su derecho para presentar pruebas y defensas de su parte. Lo anterior, con fundamento en los artículos 72 de la LFPA y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles ("CFPC").

Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, en Julio de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a. CCV/2013 (10a.), Página: 565 cuyo Rubro y texto son del tenor siguiente:



INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

"PRECLUSIÓN DE UN DERECHO PROCESAL, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE JUSTICIA PRONTA, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La preclusión es una sanción que da seguridad e irreversibilidad al desarrollo del proceso, pues consiste en la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, y por la cual las distintas etapas del procedimiento adquieren firmeza y se da sustento a las fases subsecuentes, lo cual no sólo permite que el juicio se desarrolle ordenadamente, sino que establece un límite a la posibilidad de discusión, lo cual coadyuva a que la controversia se solucione en el menor tiempo posible; de ahí que dicha institución no contraviene el principio de justicia pronta que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su imparición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que al efecto establezcan las leyes."



QUINTO. ALEGATOS

Mediante el acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil quince, notificado a **MÁXIMA COMUNICACIÓN**, por lista el diecinueve de octubre de dicha anualidad, se le concedió un plazo de diez días hábiles para formular alegatos, el cual corrió del veinte de octubre al dos de noviembre de dos mil quince.

De las constancias que forman parte del presente expediente, se observa que para tal efecto, **MÁXIMA COMUNICACIÓN** no presentó alegatos ante éste IFT. De acuerdo a lo señalado en el Resultado **NOVENO** de la presente Resolución, por proveído de cuatro de noviembre de dos mil quince, notificado a **MÁXIMA COMUNICACIÓN**, por lista el seis de noviembre de dicha anualidad, se tuvo por perdido el derecho de **MÁXIMA COMUNICACIÓN** para formular alegatos de su parte con fundamento en los artículos 72 de la LFPA y 288 del CFPC.

Por lo anterior, al no existir análisis pendiente por realizar se procede a emitir la presente Resolución atendiendo a los elementos que causan plenitud convictiva en esta autoridad, cumpliendo los principios procesales que rigen todo procedimiento.



Sirve de aplicación por analogía la siguiente Jurisprudencia que a su letra señala:

"DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un "núcleo duro", que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al "núcleo duro", las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la "garantía de audiencia", las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza.

Época: Décima Época, Registro: 2005716, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.), Página: 396."

En tales consideraciones, debe tomarse en cuenta que del ACTA DE VERIFICACIÓN, así como de las manifestaciones realizadas por MÁXIMA COMUNICACIÓN durante el desarrollo de la visita y de los monitoreos realizados durante el desahogo de la misma se desprende, lo siguiente:



1. Se confirmó la invasión del espectro radioeléctrico en la frecuencia 824.534 MHz, en el inmueble ubicado en Avenida Paseo de la Reforma, Número 250, Torre B, Piso 19, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, Distrito Federal, a través de los dos equipos amplificadores de señal de telefonía celular modelo ST-1085B AGC sin marca ni número de serie visible, conectado a la corriente eléctrica, encendido y en operación, así como sus respectivas líneas de transmisión.
2. Se detectó la invasión del espectro radioeléctrico en una banda de frecuencia concesionada y no se acreditó tener concesión o permiso expedido por autoridad competente que amparara o legitimara esta utilización.
3. MÁXIMA COMUNICACIÓN a través de quien dijo ser Asistente de Dirección Comercial confesó ser propietario del equipo mediante el cual se hacía uso del espectro radioeléctrico.

En ese sentido, este Pleno del Instituto considera que existen elementos suficientes para determinar que MÁXIMA COMUNICACIÓN efectivamente se encontraba invadiendo una vía general de comunicación consistente en el espectro radioeléctrico.

Se afirma lo anterior, en virtud de que del análisis de la conducta desplegada en relación con lo establecido en el precepto legal que se considera actualizado, claramente se puede advertir que se surten todos los supuestos previstos por el mismo.



Así, el presente procedimiento administrativo de declaratoria de pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación que se sigue a **MÁXIMA COMUNICACIÓN** se inició de oficio por la posible actualización de la hipótesis prevista en el artículo 305 de la LFTyR, que establece:

"Artículo 305. Las personas que presten servicios de telecomunicaciones o de radiodifusión, sin contar con la concesión o autorización, o que por cualquier otro medio invadan u obstruyan las vías generales de comunicación, perderán en beneficio de la Nación los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones."

Por su parte, el artículo 4 de la LFTyR precisa que el espectro radioeléctrico es una vía general de comunicación en los siguientes términos:

"Artículo 4. Para los efectos de la Ley, son vías generales de comunicación el espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones de radiodifusión y equipos complementarios, así como los sistemas de comunicación vía satélite."

Del análisis de los preceptos transcritos, se desprende que la conducta a sancionar es la invasión u obstrucción del espectro radioeléctrico como vía general de comunicación, sin contar con concesión o autorización correspondiente, por lo que con el fin de cumplir a cabalidad con el principio de tipicidad se advierte que la conducta desplegada por **MÁXIMA COMUNICACIÓN** se adecua a lo señalado por la norma.

En consecuencia, y considerando que **MÁXIMA COMUNICACIÓN** es responsable de la invasión de la vía general de comunicación consistente en el espectro radioeléctrico en la frecuencia **824.534 MHz**, sin contar con concesión, permiso o autorización correspondiente que lo habilite para tal fin, lo procedente es declarar la pérdida de los equipos detectados durante la visita de Inspección-Verificación, consistentes en:



- 1) Un equipo amplificador de señal de telefonía celular modelo ST-1085B AGC, sin marca, ni número de serie visible, asegurado con el sello número 092-15.
- 2) Un equipo amplificador de señal de telefonía celular modelo ST-1085B AGC, sin marca, ni número de serie visible, asegurado con el sello número 093-15.
- 3) Línea de transmisión, asegurada con el sello número 094-15.
- 4) Línea de transmisión, asegurada con el sello número 095-15.

Lo anterior, toda vez que el espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, el cual es un recurso limitado, que conforme a lo dispuesto en el artículo 28 la CPEUM, corresponde al Estado a través del Instituto salvaguardar su uso, aprovechamiento y explotación en beneficio del interés público.

Sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios judiciales:

"ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. FORMA PARTE DEL ESPACIO AÉREO, QUE CONSTITUYE UN BIEN NACIONAL DE USO COMÚN SUJETO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, PARA CUYO APROVECHAMIENTO ESPECIAL SE REQUIERE CONCESIÓN, AUTORIZACIÓN O PERMISO. La Sección Primera, Apartado 1-5, del Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, define a las ondas radioeléctricas u ondas hertzianas como las ondas electromagnéticas cuya frecuencia se fija convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz y que se propagan por el espacio sin guía artificial. Por su parte, el artículo 3o., fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones define al espectro radioeléctrico como el espacio que permite la propagación sin guía artificial de ondas electromagnéticas cuyas bandas de frecuencia se fijan convencionalmente por debajo de los 3,000 gigahertz. En ese tenor, si se relaciona el concepto de ondas radioeléctricas definido por el derecho internacional con el del espectro radioeléctrico que define la Ley Federal de Telecomunicaciones, se concluye que este último forma parte del espacio aéreo situado sobre el territorio nacional, sobre el que la Nación ejerce dominio directo en la extensión y términos que fije el derecho internacional conforme al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, el espectro radioeléctrico constituye un bien de uso común que, como tal, en términos de la Ley General de



Bienes Nacionales, está sujeto al régimen de dominio público de la Federación, pudiendo hacer uso de él todos los habitantes de la República Mexicana con las restricciones establecidas en las leyes y reglamentos administrativos aplicables, pero para su aprovechamiento especial se requiere concesión, autorización o permiso otorgados conforme a las condiciones y requisitos legalmente establecidos, los que no crean derechos reales, pues sólo otorgan frente a la administración y sin perjuicio de terceros, el derecho al uso, aprovechamiento o explotación conforme a las leyes y al título correspondiente.

Época: Novena Época, Registro: 170757, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: P./J. 65/2007, Página: 987"

"ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. SU CONCEPTO Y DISTINCIÓN CON RESPECTO AL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO. El artículo 3, fracción II, de la Ley Federal de Telecomunicaciones define al espectro radioeléctrico como el espacio que permite la propagación, sin guía artificial de ondas electromagnéticas, cuyas bandas de frecuencia se fijan convencionalmente por debajo de los tres mil gigahertz. Así, las frecuencias se agrupan convencionalmente en bandas, de acuerdo a sus características, y el conjunto de éstas constituye el espectro radioeléctrico, el cual integra una parte del espectro electromagnético utilizado como medio de transmisión para distintos servicios de telecomunicaciones, y es un bien del dominio público respecto del cual no debe haber barreras ni exclusividad que impidan su funcionalidad y el beneficio colectivo. Cabe señalar que el espectro radioeléctrico es un recurso natural limitado y las frecuencias que lo componen son las que están en el rango entre los tres hertz y los tres mil gigahertz y, en esa virtud, su explotación se realiza aprovechándolas directamente o concediendo el aprovechamiento mediante la asignación a través de concesiones.

Época: Décima Época, Registro: 2005184, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, Materia(s): Administrativa, Tesis: I.4o.A.72 A (10a.), Página: 1129"

En tal virtud, y toda vez que los equipos asegurados se dejaron en posesión de la [REDACTED] en su carácter de interventor especial (depositario), una vez que se notifique la presente Resolución en el domicilio de MÁXIMA COMUNICACIÓN, se deberá solicitar al depositario que ponga a disposición de este Instituto los equipos asegurados.

INSTITUTO FEDERAL DE
TELECOMUNICACIONES

En virtud de que quedó plenamente acreditado que MÁXIMA COMUNICACIÓN actualizó la hipótesis prevista en el artículo 305 de la LFTyR, el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones:



RESUELVE

PRIMERO. MÁXIMA COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.C., propietario de los equipos mediante los cuales se invadió el espectro radioeléctrico en la frecuencia de 824.534 MHz, instalado en el domicilio ubicado en Avenida Paseo de la Reforma, Número 250, Torre B, Piso 19, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, Distrito Federal, actualizó la hipótesis normativa prevista en el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tal como quedó debidamente demostrado en la presente Resolución.

SEGUNDO. De conformidad con lo señalado en el Considerando Quinto de la presente Resolución y con fundamento en el artículo 305 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se declara la pérdida en beneficio de la Nación, de los bienes, instalaciones y equipos empleados en la comisión de dicha infracción por MÁXIMA COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.C., consistentes en: dos equipos amplificadores de señal de telefonía celular modelo ST-1085B AGC sin marca ni número de serie visible y sus respectivas líneas de transmisión, mismos que fueron debidamente identificados en el ACTA DE VERIFICACIÓN IFT/DF/DGV/268/2015.

TERCERO. Con fundamento en los artículos 41 y 43, fracción VI del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, instrúyase a la Unidad de Cumplimiento, para que a través de la Dirección General de Verificación se haga del conocimiento del interventor especial (depositario) la revocación de su nombramiento y ponga a disposición los bienes que pasan a poder de la Nación, previa verificación de que los sellos de aseguramiento no han sido violados y previo inventario pormenorizado de los citados bienes.



CUARTO. Con fundamento en el artículo 35, fracción I de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se ordena que la presente Resolución se notifique personalmente a **MÁXIMA COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.C.**, en el domicilio precisado en el proemio de la presente Resolución.

QUINTO. En términos del artículo 3, fracción XIV, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se informa a **MÁXIMA COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.C.**, que podrá consultar el expediente en que se actúa en las oficinas de la Unidad de Cumplimiento del este Instituto Federal de Telecomunicaciones, con domicilio en Avenida Insurgentes Sur número 838, cuarto piso, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, México, Código Postal 03100, Distrito Federal, (edificio alterno a la sede de este Instituto) dentro del siguiente horario: de lunes a jueves las 9:00 a las 18:00 horas y el viernes de 8:30 a 16:30 horas.

SEXTO. En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 3, fracción XV, y 39 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, se hace del conocimiento de **MÁXIMA COMUNICACIÓN GRÁFICA, S.C.**, que la presente Resolución constituye un acto administrativo definitivo y por lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 312 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, procede interponer ante los juzgados de distrito, especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República, el juicio de amparo indirecto dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente Resolución, en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

SÉPTIMO. En su oportunidad archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.



Así lo resolvió el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones, con fundamento en los artículos señalados en los Considerandos Primero y Segundo de la presente Resolución.

[Signature]
Gabriel Oswaldo Contreras Saldivar
Comisionado Presidente

[Signature]
Luis Fernando Borjón Figueroa
Comisionado

[Signature]
Ernesto Estrada González
Comisionado

[Signature]
Adriana Sofía Labardini Inzunza
Comisionada

[Signature]
María Elena Estavillo Flores
Comisionada

[Signature]
Mario Germán Fromow Rangel
Comisionado

[Signature]
Adolfo Cuevas Teja
Comisionado

[Handwritten mark]

La presente Resolución fue aprobada por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones en su XXVII Sesión Ordinaria celebrada el 25 de noviembre de 2015, por unanimidad de votos de los Comisionados Gabriel Oswaldo Contreras Saldivar, Luis Fernando Borjón Figueroa, Ernesto Estrada González, Adriana Sofía Labardini Inzunza, María Elena Estavillo Flores, Mario Germán Fromow Rangel y Adolfo Cuevas Teja; con fundamento en los párrafos vigésimo, fracciones I y III; y vigésimo primero, del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 7, 16 y 45 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; así como en los artículos 1, 7, 8 y 12 del Estatuto Orgánico del Instituto Federal de Telecomunicaciones, mediante Acuerdo P/IFT/251115/534.